

El 29 de agosto, 2023

Estimados miembros del Congreso de los Estados Unidos,

Como organizaciones humanitarias, religiosas, de derechos humanos, laborales, ambientales, colombiana-estadounidenses y otras organizaciones de la sociedad civil de los EE. UU. que apoyan desde hace mucho tiempo soluciones pacíficas a las décadas del conflicto violento en Colombia, le instamos a apoyar las disposiciones del Senado del FY24 Ley de Asignaciones para la Cooperación Externa que brinda ayuda para apoyar la consolidación de la paz, el avance de los derechos humanos y el bienestar de quienes han sufrido el cruel impacto de la guerra en ese país.

La Administración Petro ha expresado su compromiso de implementar los acuerdos de paz de 2016 y expandir la paz; ha indicado a través de sus políticas, miembros de su equipo y colaboración con organizaciones internacionales de derechos humanos su compromiso con el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho; ha continuado la generosa tradición de Colombia de ofrecer refugio a millones de migrantes y refugiados venezolanos; se compromete a proteger los derechos de los pueblos afrocolombianos e indígenas, las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTQ+; y es líder y aliado en los esfuerzos para abordar la deforestación de la región amazónica y el cambio climático. Estados Unidos debe aprovechar esta oportunidad para continuar y profundizar la cooperación en la consolidación de la paz; mejorar el respeto por los derechos humanos y la protección de los defensores de los derechos humanos, incluidos los activistas por la tierra y el medio ambiente; mejorar la protección de las comunidades rurales, incluidos los pueblos indígenas y afrocolombianos y los campesinos; implementar el Capítulo Étnico de los acuerdos de paz de 2016 y abordar la discriminación racial y de género; colaborar con los esfuerzos colombianos para recibir a migrantes y refugiados venezolanos; y abordar los desafíos cada vez más urgente del cambio climático. Eliminar los fondos para Colombia en estas áreas va directamente en contra de los objetivos políticos bipartidistas estadounidenses de largo plazo en el país y la región.

Estados Unidos también debe continuar colaborando con Colombia en políticas de control de drogas más sostenibles y efectivas. En particular, aprovechando la caída de los precios de la coca, Estados Unidos y Colombia deberían duplicar esfuerzos para ayudar a los campesinos a cambiar a cultivos lícitos; ampliar los esfuerzos para formalizar los títulos de propiedad de la tierra, lo que da incentivos a los agricultores para comprometerse permanentemente con los cultivos lícitos; y respaldar los esfuerzos colombianos para investigar y procesar a los traficantes y a los blanqueadores de dinero e investigar y procesar los vínculos corruptos entre líderes políticos y miembros de las fuerzas de seguridad con narcotraficantes y grupos armados ilegales.

Entre los programas que creemos que el Congreso de los EE. UU. debería apoyar firmemente, incluidos en el proyecto de ley del Senado, están: \$15 millones para el programa de derechos humanos de USAID, que apoya el respeto por los derechos humanos, la protección de los defensores de los derechos humanos y la implementación del acuerdo de paz; \$25 millones para comunidades y organizaciones afrocolombianas e indígenas; programas para la reintegración de ex-combatientes a la vida civil; actividades de desminado; programas para ayudar a formalizar la titulación de tierras y devolver tierras a la población desplazada; programas para ayudar a los campesinos a cambiar a cultivos lícitos; apoyo al sistema tripartito de justicia transicional establecido después de los acuerdos de paz de 2016, incluida la

Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, así como actividades de seguimiento para compartir lecciones aprendidas e implementar recomendaciones de la Comisión de la Verdad; programas de apoyo a los derechos laborales; y programas para ayudar e integrar a venezolanos y otros migrantes y refugiados mientras que al mismo tiempo ayudan a las comunidades receptoras. Urgimos a proporcionar \$5 millones a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, por encima de los \$3 millones incluidos en el informe del Senado, por sus invaluable esfuerzos para brindar monitoreo y asesoramiento técnico para mejorar los derechos humanos, proteger a los defensores de los derechos humanos, consolidar la paz y monitorear la situación humanitaria en las zonas rurales aún en conflicto. Además, apoyamos la continuación de las condiciones de derechos humanos vinculadas a la ayuda militar y policial incluidas en el Senado. Estas condiciones son necesarias para incentivar el progreso con respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad colombianas y han estado en la legislación de alguna forma desde el año fiscal 2000.

También instamos a los congresistas a que no retengan la sección 7045 (e) que podría impedir la asistencia económica del Título III a muchos países de América Latina, el Caribe, África y otras partes del mundo.

Gracias por su apoyo a la consolidación de la paz y el estado de derecho en Colombia.

AfricanDefenders (Pan African Human Rights Defenders Network)  
Afro-Colombian Global Initiative  
Amazon Watch  
American Federation of Teachers  
Colombia Acuerdo de Paz NGO  
Colombia Human Rights Committee  
Colombia Human Rights Network  
Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd, U.S. Provinces  
Darryl Chappell Foundation  
Disciples Center for Public Witness (Disciples of Christ)  
FOR Peace Presence  
Franciscan Action Network  
Global Black  
Global Ministries, Christian Church (Disciples of Christ) and the United Church of Christ  
Healing Bridges  
Human Pictures  
Immigrant Assistance Services Foundation  
International Institute for Race & Equality  
InterReligious Task Force on Central America and Colombia  
Latin America Working Group (LAWG)  
Loretto Community Latin America/Caribbean Committee  
Mano River Union Civil Society Natural Resources Rights and Governance Platform  
Mennonite Central Committee U.S.  
Missionary Oblates/OIP Trust  
National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd

National Council of Churches

Oxfam America

Pax Christi USA

Presbyterian Church (U.S.A.)

Presbyterian Peace Fellowship

Program for the Heritage of Ogiek and Mother Earth (PROHOME)

United Church of Christ, Justice and Local Church Ministries

Washington Brazil Office

Washington Office on Latin America (WOLA)

Witness for Peace Solidarity Collective